

PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO, SANCIONAN CON FUERZA DE LEY

LEY BASE DE PARTIDOS POLÍTICOS

Artículo 1º – Libertad de asociación.

En conformidad con la Constitución Nacional y la legislación vigente, y con el objeto de garantizar a todos los ciudadanos la participación en la vida política de la República, se sanciona la presente ley, que regula la creación y funcionamiento de los partidos políticos, instrumentos esenciales para la expresión de la voluntad popular, la representación política, la formulación de programas de gobierno y la nominación de candidaturas a cargos públicos electivos.

Artículo 2º – Creación y personería.

La constitución de partidos será libre y voluntaria, requiriendo solamente la confección de un acta fundacional, una declaración de principios, una carta orgánica y la inscripción ante la Justicia Electoral, que debe hacerse de manera digital. La personería jurídico-política se adquirirá una vez cumplidos los requisitos de afiliación mínima y reconocimiento judicial.

Artículo 3º.- Del nombre partidario.

El nombre constituye un atributo exclusivo e identificadorio del partido político, quedando prohibido su uso por cualquier otra agrupación, asociación o entidad de naturaleza pública o privada dentro del territorio de la Nación.

El nombre será adoptado en el acto constitutivo, sin perjuicio de su ulterior modificación o sustitución, debiendo en todos los casos contar con la aprobación de la Justicia Federal con competencia electoral, previo cumplimiento de las disposiciones

legales vigentes. La resolución definitiva deberá ser comunicada a la Cámara Nacional Electoral.

La denominación "partido" podrá ser empleada únicamente por las agrupaciones reconocidas o en trámite de reconocimiento. El nombre partidario deberá ser conciso, razonablemente distintivo y no podrá contener designaciones personales, ni derivadas de ellas, ni expresiones tales como "argentino", "nacional", "internacional" o sus equivalentes, ni aquellas cuyo significado afecte o pueda afectar las relaciones internacionales del Estado. Asimismo, se prohíbe la inclusión de palabras, símbolos o alusiones que exterioricen antagonismos raciales, de clase o religiosos, o que conduzcan a provocarlos.

En caso de escisión, el grupo disidente no tendrá derecho a emplear, ni total ni parcialmente, el nombre originario del partido, ni a agregarle aditamentos que puedan inducir a confusión o aprovechamiento indebido de su identidad política.

Artículo 4º – Digitalización obligatoria.

La organización y el funcionamiento de los partidos se realizarán mediante plataformas digitales seguras autorizadas por la Justicia Electoral, las cuales deberán:

- a) Permitir la afiliación y desafiliación digital con verificación biométrica;
- b) Mantener actualizados los registros de afiliados y padrones;
- c) Garantizar la realización de elecciones internas en línea, asegurando la identidad de los votantes, así como la privacidad e inviolabilidad del voto;
- d) Asegurar trazabilidad, auditoría permanente y políticas de seguridad informática.

Artículo 5º – Transparencia.

Los registros de afiliación, padrones, libros de inventario, caja y actas serán llevados en soporte digital rubricado electrónicamente y estarán sujetos a control judicial y auditoría pública en los términos que establezca la reglamentación de esta ley.

Artículo 6º – Principios de funcionamiento.

Los partidos deberán organizarse en forma democrática y permitir la participación de los distintos rangos etarios, de ambos sexos y de minorías étnicas y religiosas tanto en

la membresía como en la integración de sus órganos de gobierno, así como actuar conforme a los principios de transparencia, integridad y rendición de cuentas regulados por la legislación vigente.

Artículo 7º – Afiliaciones.

La afiliación a un partido político será personal, libre y voluntaria.

Se realizará exclusivamente con verificación biométrica de identidad a través de la plataforma digital partidaria. Las autoridades partidarias deberán garantizar la autenticidad de los registros, la protección de los datos personales y la posibilidad de desafiliación en forma similar a la afiliación.

Ningún ciudadano podrá figurar simultáneamente como afiliado en más de un partido político. La inobservancia de esta regla causará la nulidad de ambas afiliaciones y la inhabilitación por 5 (cinco) años para afiliarse a un nuevo partido político.

La desafiliación podrá ejercerse en todo momento por vía electrónica, mediante la misma plataforma digital en la cual la opción de desafiliarse figure con la misma jerarquía que la afiliación, y surtirá efecto inmediato.

El ciudadano que se haya desafiliado no podrá solicitar nueva afiliación a otro partido político dentro del plazo de tres (3) años contados desde la fecha de su desafiliación.

Artículo 8º – Elecciones internas.

Las elecciones internas para la designación de autoridades partidarias y la selección de candidatos a cargos electivos se efectuará periódicamente, en forma digital y en línea mediante la plataforma partidaria, la cual deberá asegurar:

- a) la validación fehaciente de la identidad de los votantes;
- b) la privacidad e inviolabilidad del voto;
- c) la transparencia, trazabilidad y auditoría de los procesos;
- d) la seguridad informática antifraude.

Artículo 10º – Del rol de contralor de la Justicia Electoral.

La Justicia Federal con competencia electoral ejercerá el control de la legalidad, transparencia y regularidad democrática de la organización, funcionamiento y actuación

de los partidos políticos, tanto en el ámbito nacional como en el distrital. Dicho control comprenderá la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias, la fiscalización de los procesos de afiliación, de la administración y rendición de cuentas, de las elecciones internas, de la conformación de los órganos partidarios, y de toda otra actividad sujeta a control judicial conforme a la presente ley.

A tal efecto, la Justicia Electoral podrá requerir, mediante los medios electrónicos y las plataformas digitales, la remisión de la documentación, datos o registros necesarios para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, garantizando la autenticidad, trazabilidad y privacidad de la información.

Artículo 11.º Autoridad Superior de la Cámara Nacional Electoral.

La Cámara Nacional Electoral constituye la máxima autoridad judicial en materia electoral y de partidos políticos, y ejerce la superintendencia sobre los jueces federales con competencia electoral. Le corresponde dictar las normas reglamentarias complementarias, resolver los conflictos de competencia, entender en los recursos interpuestos contra las decisiones de los jueces electorales, y velar por la uniformidad de criterios y la correcta aplicación de la legislación electoral en todo el territorio de la Nación.

La Cámara Nacional Electoral es también la autoridad de aplicación en materia de sistemas digitales electorales y de fiscalización de las plataformas electrónicas partidarias, debiendo garantizar la transparencia, seguridad informática y protección de los datos personales involucrados en el funcionamiento de los partidos.

Artículo 12º – Reglamentación.

Quedan derogadas todas las disposiciones legales contrarias a la presente ley.

Los gastos que demande su cumplimiento se tomarán de "Rentas Generales", con imputación a la misma.

Las disposiciones complementarias sobre requisitos, procedimientos, plazos, fiscalización y sanciones serán establecidas por su reglamentación.

Artículo 13º - Comuníquese al Senado y al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El presente proyecto de Ley Base de Partidos Políticos se propone actualizar de manera integral el régimen jurídico aplicable a los partidos políticos en la República Argentina, adecuándolo a los principios constitucionales de libertad, democracia, igualdad y transparencia, e incorporando los avances tecnológicos que hoy resultan indispensables para garantizar un ejercicio pleno, accesible y moderno de los derechos políticos.

Desde la reforma constitucional de 1994, el artículo 38 de la Constitución Nacional reconoció expresamente que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático, instrumentos necesarios para la formulación de la voluntad popular y para la organización y ejercicio del poder político. Sin embargo, pese a su consagración constitucional, la normativa vigente —en especial la Ley Orgánica de Partidos Políticos N.º 23.298 y sus modificatorias— mantiene una estructura fragmentada, con procedimientos mayormente analógicos, que no responden a las exigencias de una sociedad digitalizada ni a los estándares contemporáneos de integridad y transparencia pública.

El nuevo modelo que se propone se sustenta sobre cuatro principios estructurantes: la libertad de asociación política, la democratización interna, la transparencia institucional y la modernización tecnológica. Estos ejes pretenden fortalecer la legitimidad del sistema representativo, facilitar el acceso ciudadano a la participación política y consolidar el control público sobre la vida interna de las organizaciones partidarias, en armonía con el mandato constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

En primer lugar, el principio de libertad de asociación política, expresado en el artículo 1º del proyecto, reafirma el derecho de todos los ciudadanos a crear, organizar y participar libremente en partidos políticos, conforme a los artículos 14 y 38 de la Constitución Nacional, el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos y el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta libertad no es meramente formal, sino sustancial: implica reconocer la autonomía organizativa y funcional de los partidos, al mismo tiempo que exige que su actuación se enmarque en los valores del sistema democrático y en el respeto a la legalidad constitucional.

En segundo término, el principio de democracia interna atraviesa toda la estructura de la ley. Se garantiza que los partidos se organicen sobre bases participativas, con igualdad de derechos entre afiliados, elecciones periódicas y sistemas de selección transparentes para las autoridades y candidaturas. En este sentido, el proyecto incorpora un criterio de inclusión representativa, exigiendo que la integración de los órganos de gobierno partidarios permita la participación de ambos géneros, de los distintos rangos etarios y de minorías étnicas y religiosas, garantizando que las estructuras partidarias reflejen la diversidad social y cultural del país. La democracia interna se convierte así en una condición esencial de la legitimidad del partido político como sujeto de derecho público no estatal y como vehículo de la voluntad popular.

El tercer principio es el de transparencia e integridad institucional, mediante el cual se busca consolidar una relación de confianza entre los partidos y la ciudadanía. El proyecto dispone que todos los registros de afiliación, padrones, libros contables, inventarios y actas deberán llevarse en soporte digital rubricado electrónicamente y estarán sujetos a control judicial y auditoría pública. Se supera así el modelo basado en registros en papel o controles formales esporádicos, sustituyéndolo por un régimen de fiscalización continua, accesible y trazable, acorde con las exigencias del artículo 38 de la Constitución Nacional, que establece el deber de los partidos de rendir cuentas públicas del origen y destino de sus fondos.

Finalmente, el principio de modernización tecnológica introduce una reforma estructural del funcionamiento partidario. El proyecto establece la digitalización obligatoria de los procedimientos de afiliación, desafiliación, elecciones internas y rendición de cuentas. Estas innovaciones responden a la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas seguras y auditables, que reduzcan la discrecionalidad administrativa y los márgenes de

fraude, garantizando al mismo tiempo la privacidad del votante, la autenticidad del voto y la protección de los datos personales conforme a la Ley N.º 25.326.

La utilización de plataformas digitales validadas por la Justicia Electoral representa una transición hacia un modelo de gobernanza política digital, donde la trazabilidad, la identidad biométrica y la accesibilidad remota amplían el ejercicio de la ciudadanía política, eliminando barreras geográficas y burocráticas. Lejos de desnaturalizar la función de los partidos, esta innovación refuerza su carácter representativo y participativo, acercando las estructuras partidarias a los ciudadanos mediante medios tecnológicos confiables y fiscalizables.

En este esquema, la Justicia Federal con competencia electoral y la Cámara Nacional Electoral asumen un rol central de control y supervisión. El proyecto fortalece sus facultades, reconociendo a la Cámara como autoridad superior en materia de fiscalización partidaria y autoridad de aplicación en los sistemas digitales de gestión y votación. Esta función de contralor se ejerce bajo los principios de legalidad, transparencia, uniformidad de criterios y tutela judicial efectiva, asegurando la coherencia normativa y el respeto de los derechos políticos en todo el territorio nacional.

La propuesta, en suma, no pretende limitar la vida política de los partidos, sino dotarla de seguridad jurídica, transparencia y legitimidad democrática, adecuando su funcionamiento a las nuevas condiciones sociales y tecnológicas. Se busca garantizar que los partidos políticos sean, en los hechos, verdaderos canales de participación ciudadana, con procedimientos accesibles, inclusivos y controlables, en lugar de estructuras cerradas o burocratizadas.

El nuevo marco legal reconoce así a los partidos como instituciones de derecho público no estatal, dotadas de autonomía y al mismo tiempo sujetas al control constitucional. Su fortalecimiento democrático no puede dissociarse del fortalecimiento de la República: la transparencia partidaria es condición de la transparencia del sistema político en su conjunto.

Por todo lo expuesto, este proyecto constituye una actualización normativa necesaria y urgente, que pretende asegurar la vigencia efectiva de los principios de libertad, igualdad, transparencia y modernización en la vida política argentina, consolidando un sistema de partidos abierto, democrático e inclusivo, tecnológicamente confiable y plenamente concordante con el espíritu y los valores de la Constitución Nacional.



Fernando Iglesias,
Diputado Nacional